



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2000/NGO/61
8 de febrero de 2000

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
56º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Exposición presentada por escrito por el Centro Asiático de Procedimientos
de Recurso, organización no gubernamental reconocida como
entidad consultiva general

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición escrita, que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[29 de diciembre de 1999]

Escasez de alimentos en Myanmar

1. El derecho a la alimentación constituye uno de los derechos humanos fundamentales. Está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (párrafo 1 del artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11).

2. En la Unión de Myanmar, el gobierno militar que domina el país niega a su pueblo el derecho a la alimentación. Pruebas contrastadas sugieren que el Gobierno de Myanmar está denegando sistemáticamente alimentos a la población civil, mediante una serie de prácticas destinadas a conseguir la perpetuación de su régimen antidemocrático.

3. La penuria alimentaria que reina en Myanmar no se debe a un desastre natural ni a una mera incompetencia administrativa, sino más bien a una militarización intensiva. El Gobierno no sólo no ha cumplido con sus obligaciones positivas de garantizar la seguridad alimentaria, sino que debe ser considerado también responsable de unas iniciativas administrativas y militares que han desembocado en una privación generalizada de alimentos a la población civil. En sus conclusiones, el Centro Asiático de Procedimientos de Recurso coincide con la opinión del Tribunal Popular sobre penuria alimentaria y militarización en Birmania, que fue invitado a examinar la cuestión por la Comisión Asiática de Derechos Humanos. El Tribunal Popular hizo públicas sus observaciones en un informe titulado "Voz de la nación hambrienta" (Comisión Asiática de Derechos Humanos, octubre de 1999).

4. Desde el punto de vista de la política administrativa, el Gobierno de Myanmar está violando el derecho a la alimentación al negar el derecho al trabajo, al imponer una fiscalidad nefasta, al confiscar las tierras y al exigir reiteradamente a los civiles la realización de trabajos forzados. El Estado impide o restringe el trabajo autónomo de sus ciudadanos para obtener la seguridad alimentaria. Los agricultores no pueden elegir cuándo, dónde y cómo plantar. En las zonas de conflicto armado, su vida corre peligro y están expuestos a una situación de inestabilidad que no les permite aprovechar su esfuerzo, la tierra y los recursos naturales para su subsistencia. En otras partes del país, los agricultores son víctimas de políticas que anteponen el propio bienestar de los gobernantes a los intereses del Estado. Independientemente de las circunstancias económicas, las comunidades civiles se ven obligadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios generada por la superestructura impuesta por los militares.

5. El cultivo del arroz constituye la principal ocupación laboral de la población. Los agricultores han de acogerse a un programa obligatorio de compra de la cosecha, que es aplicado en todo el país por organismos gubernamentales. El Gobierno paga a los agricultores generalmente la mitad del precio de mercado, pero a veces mucho menos. Esa práctica es, en realidad, un impuesto sobre la producción. La razón de ser de ese programa estriba en la necesidad de alimentar a las fuerzas armadas y suministrar arroz a los funcionarios a un precio rebajado, pero de hecho no logra el objetivo de promover la seguridad alimentaria. El contingente de arroz se fija en función de las tierras de cada agricultor y se aplica sin tener en cuenta las circunstancias concretas de los productores. Ha habido quienes, tras perder su cosecha, se han visto sin embargo obligados a aportar el contingente asignado, por lo general con grandes

dificultades, ya que han debido adquirir el arroz a precios de mercado para cumplir los objetivos estatales. Muchos caen en la espiral de las deudas y terminan perdiendo sus tierras a causa de unas leyes de la época socialista. Algunos pierden incluso las tierras después de haber satisfecho todas las demandas del Estado, como por ejemplo, la de facilitar la plantación de cultivos comerciales gestionados por los militares. En los párrafos 51 a 53 del informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar (E/CN.4/1999/35), se aborda la cuestión de la confiscación de tierras de cultivo por el Estado.

6. La práctica estatal generalizada en Myanmar de imponer trabajos forzados está ampliamente documentada, en particular en el informe de la Comisión de Investigación establecida con arreglo al artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Las enormes y constantes exigencias del Estado para que la población civil aporte su mano de obra de forma obligatoria y gratuita equivalen así mismo a denegar el derecho a la alimentación. Siempre que se producen casos de trabajos forzados, este derecho se ve afectado de tres maneras distintas. En primer lugar, reducen la cantidad de tiempo y energía de que dispone la población para invertir en tareas productivas en beneficio propio. En segundo lugar, representan una sangría económica para las familias que incumplen esa obligación. En tercer lugar, durante la ejecución de dichos trabajos, la población pasa hambre.

7. Las fuerzas armadas de Myanmar son las responsables directas de las violaciones del derecho a la alimentación. En ningún otro lugar del país se niega tan flagrantemente este derecho como en las zonas que se siguen considerando más expuestas al peligro de la insurgencia. En esas regiones, se utiliza la privación de alimentos como táctica antisubversiva. Entre las violaciones de los derechos que se producen en esos puntos, cabe mencionar la destrucción de las reservas de alimentos y cultivos, el desplazamiento y reasentamiento de comunidades civiles y la expropiación masiva de dinero y efectos materiales por el ejército.

8. Las operaciones militares están claramente dirigidas contra las reservas rurales de alimentos y los cultivos tradicionales. El ejército no distingue entre los alimentos destinados al consumo civil y los destinados supuestamente a los rebeldes. En todas las fases de la producción agrícola, la población civil de esas zonas está expuesta a ataques, tanto contra sus personas como contra su producción.

9. Los militares desalojan a la población de sus aldeas, dispersándola a veces por las colinas y la selva y forzándola a instalarse en reasentamientos. Los que se han refugiado en la selva se ven privados de un suministro regular de alimentos. Han de afrontar una penuria alimentaria muy severa que puede conducirles a la hambruna y la muerte. El Relator Especial ha formulado observaciones al respecto en los párrafos 62 y 63 de su informe de enero de 1999. Incluso se está procediendo a un reasentamiento forzoso de grandes grupos en campos de concentración vigilados por los militares. Ese programa de "zonificación estratégica" no es nuevo en Myanmar; sin embargo, en los últimos años, ha registrado una rápida expansión en ciertas regiones, sobre todo en los estados de Shan y Karenni, provocando un enorme caos en las economías rurales de la región. También en este caso, el Relator Especial ha mencionado esas circunstancias en los párrafos 39, 49, 50 y 64 a 66 de su

informe de enero de 1999. Cuando los agricultores son desalojados de sus tierras sin una compensación económica o la oferta de nuevas parcelas de terreno, acaban sirviendo de reserva de mano de obra contributiva para las unidades militares locales. Los desplazamientos generalizados están desembocando, por consiguiente, en una escasez alimentaria estructural a largo plazo de características muy graves, y no en una mera hambruna estacional debida a incursiones militares ocasionales.

10. Ya se trate de reasentamientos forzosos o no, la población debe proporcionar a las autoridades militares locales dinero en efectivo, bienes y servicios. Esas exigencias son habitualmente arbitrarias e imprevisibles. Las comunidades o familias de las aldeas que incumplen, según estiman, sus obligaciones con respecto a los militares, han de pagar una multa, lo que repercute en una marcada reducción de los recursos y del capital que constituyen los medios de subsistencia de la población.

11. Esas violaciones del derecho a la alimentación en Myanmar guardan relación con las medidas que el Gobierno ha adoptado para ampliar la militarización a todo el país. Las funciones tradicionales del Estado se han militarizado hasta el punto de que prácticamente todas las transacciones entre el pueblo y el Estado llevan aparejadas un cierto grado de coacción. Ya se trate de recoger los contingentes de arroz o de recaudar impuestos o de exigir una mano de obra forzosa, las autoridades recurren a la amenaza de los militares para asegurarse de ver cumplidos sus objetivos. La política agrícola nacional se desentiende de las necesidades del pueblo, orientándose a satisfacer las de los militares y las del propio Estado. Los medios de comunicación refuerzan y consagran el *status quo*, confundiendo la función de soldado y de agricultor, al hacerse continuamente eco de las directrices militares en cuestiones agropecuarias. La presencia militar afecta incluso a las decisiones económicas cotidianas más elementales de cualquier familia. La administración básica se ha visto sumergida por la ola de autoritarismo militar, con el resultado de una población sometida enfrentada a una situación de penuria alimentaria.

12. El Gobierno alega retóricamente que su compromiso es garantizar la seguridad alimentaria de su pueblo. Sin embargo, las pruebas en sentido contrario son abrumadoras. Según informes independientes, se ha podido demostrar de manera inequívoca que el Gobierno está socavando sistemática y deliberadamente sus metas y deberes explícitos, en detrimento de la población del país. Finalmente, se anteponen los intereses de los militares y del Gobierno a los del pueblo, ignorando así en la práctica las obligaciones positivas que el Estado ha prometido defender en principio, provocando de esa manera una situación de escasez alimentaria.

13. El Gobierno de Myanmar debe ser considerado responsable de la prolongada penuria alimentaria que reina en el país. Otros factores, como los desastres naturales, o la simple incompetencia de los funcionarios, pueden contribuir a la inestabilidad alimentaria o agravarla aún más. Ninguno, sin embargo, es tan generalizado o sistemático, ni puede justificar que se niegue el acceso a los alimentos a los propios productores, como las políticas deliberadas de negación de los alimentos adoptadas por el Gobierno. Y no hay ninguno que pueda superar el papel decisivo que el Estado ha desempeñado en la violación del derecho a la alimentación.

14. Negar a gran escala los alimentos a una población es un crimen de lesa humanidad, que el derecho internacional tipifica como delito susceptible de castigo. En el caso de que un Gobierno omita las medidas necesarias para invertir esa tendencia, los culpables de la constante violación de este derecho humano fundamental deberán responder de sus acciones. La comunidad internacional y, en especial, los organismos de las Naciones Unidas, tienen el deber de tratar la cuestión de la seguridad alimentaria como un tema de violación de derechos humanos fundamentales en Myanmar. El Centro Asiático de Procedimientos de Recurso insta a que se nombre una comisión internacional para examinar la cuestión. Es menester prestar la debida atención a la responsabilidad que el Gobierno de Myanmar tiene en la génesis de la escasez de alimentos y debe presionársele para que ponga fin a las políticas y prácticas que están provocando la vulneración sistemática del derecho del pueblo a la alimentación.
